

Crisis financiera y replanteamiento del financiamiento de la educación pública superior en México

Iris Guevara González*

Introducción

De 1950 a 1970 el desarrollo económico y social fue el objetivo fundamental de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, para lograrlo se apoyó al proceso de industrialización, se desarrolló la infraestructura de transportes, comunicaciones y energía, se ampliaron los servicios públicos de educación, salud, vivienda y seguridad social.

Sin embargo, hacia fines de la década de los setenta, después de varias crisis era claro que éste modelo de desarrollo presentaba fuerte desequilibrios económicos, financieros, sociales y políticos; elementos que favorecieron el predominio de la ideología y la *praxis* neoliberal, que se consolidó después de la crisis de la deuda de 1982. La gravedad de los problemas financieros fueron fundamentales para centrar la política económica en el control de la estabilidad monetaria y financiera.

Las opciones de política económica que este modelo planteó para salir de las crisis fueron: disciplina fiscal, desregulación y aumento de la apertura económica al exterior. Estas modificaciones en la economía fueron denominadas *Reformas estructurales* y tenían como objetivo retomar el crecimiento económico.

Sin embargo, ya para inicios de la década de los noventa, era claro que las políticas neoliberales no habían resuelto los problemas económicos y a menudo los habían profundizado aún más. A pesar de que la desregulación económica fue más profunda en las economías más endeudadas, en las más pobres, las que tenían menos capacidad de negociación.

Ante el fracaso de estas reformas, a finales de la década de los ochenta, el gobierno liberalizó la economía para tratar de allegarse recursos financieros y estabilizar ciertas variables macroeconómicas con la idea de que el flujo de capitales foráneos permitiría el pago del servicio de la deuda externa, equilibraría la ganancia comercial e impulsaría el crecimiento sostenido de la economía.

Sin embargo, la liberalización económica se dio después de un período en que no había crecido la inversión productiva, con escasez de recursos humanos calificados, sin una industria de bienes de capital y con un incipiente desarrollo tecnológico. Se abrió la economía sin tomar en cuenta las características de la estructura productiva nacional, con la idea de que la competencia impulsaría el desarrollo, incrementaría la productividad y por tanto mejoraría las condiciones de acumulación.

*Investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

Actualmente podemos ver que el resultado de las políticas neoliberales ha sido muy pobre: el crecimiento económico ha sido insuficiente, con alta concentración del poder económico que ha ampliado las desigualdades, tanto internas como externas, y profundizando las diferencias entre el desarrollo y el subdesarrollo. Como más adelante explicaremos, se ha ampliado, la brecha educativa y tecnológica. El achicamiento del Estado ha limitado los espacios y bienes públicos, incrementado la pobreza, la exclusión social y el deterioro ambiental.

La inversión privada no fue suficiente para cubrir los espacios que había dejado el Estado. Y el modelo exportador, a pesar del incremento exponencial de las exportaciones durante varios años, desestructuró la industria nacional y nos hizo más dependientes de los vaivenes de la economía estadounidense, con la cual realizamos más de 80% de nuestro comercio. Además de que la falta de inversión en ciencia y tecnología y la falta de capacitación de capital humano, durante nuestro período de análisis, nos ha convertido en exportadores de mercancías con bajo valor agregado.

La disminución de la participación del Estado en la economía y la venta de empresas paraestatales y la insuficiente inversión privada, limitaron la creación de empleos, aumentó la pobreza y la pobreza extrema y se amplió la informalidad en el empleo. El modelo “maquilador” que se impulsó contribuyó a promover el empleo no calificado.

Desde el inicio de la aplicación de políticas neoliberales, el gobierno trató de atraer capitales ufanándose de los bajos salarios que se perciben en México. Sin embargo, la competencia basada en salarios bajos tampoco funcionó, debido a que países como China y otras naciones asiáticas tienen costos unitarios de trabajo inferiores. Uno de los temas reiterados con el proceso de globalización ha sido la necesidad de incrementar la competitividad. Sin embargo, a partir de la década de los ochenta, el gobierno mexicano contrajo el gasto en educación superior, ciencia y tecnología. En un momento en el que los países desarrollados y los emergentes aumentaban su participación en estos dos rubros fundamentales.

Es a la luz de los pobres resultados de la economía nacional y de la actual crisis económica, que resurge la necesidad de replantear la participación del Estado, como regulador e impulsor de la actividad económica en los estados-nación. Así como la relevancia de tener políticas públicas que impulsen el desarrollo económico y social.

Políticas ortodoxas, educación superior, ciencia y tecnología

Como producto de la crisis de deuda y la crisis fiscal, así como del predominio de las políticas neoliberales, se dio una fuerte disminución de la participación del Estado en la economía y en el gasto educativo, y en específico del gasto en

educación superior. Así como el abandono, en los hechos, del impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología. En el momento en que se estaban llevando a cabo cambios fundamentales en la economía mundial. Desde finales del siglo XX el conocimiento ha sido central en la reproducción económico-social.

En términos políticos se dio un cambio en el proyecto de nación, en el Estado nacionalista-desarrollista la educación era parte del patrimonio social y un derecho de los ciudadanos. Con el neoliberalismo se da un cambio en el discurso educativo, sustentado en: la calidad, la evaluación, la eficiencia, la productividad, la pertinencia y la excelencia. Este nuevo discurso responde a las necesidades empresariales y en su elaboración han participado: funcionarios, empresarios y algunos académico que coinciden con esta visión empresarial de la educación.

El Estado, en nuestro período de análisis, limita el financiamiento a las instituciones públicas de educación y fomenta el crecimiento de la educación privada, encargándose sólo de las áreas educativas poco rentables, que no interesan al sector privado pero que son necesarias para el funcionamiento de la nación.

Se establecen programas selectivos, aunque muchas veces insuficientes, de financiamiento para universidades públicas importantes y para centros de educación tecnológica de nivel medio y superior. Y a partir de la creación del Sistema Nacional de Educación Superior (1999), el gobierno empieza a financiar instituciones privadas.

Paralelamente el Estado se convierte en impulsor de la evaluación y la certificación, que explotan empresas privadas. El Estado promueve la participación directa de empresarios nacionales y extranjeros en la conducción de la educación superior. Acentuando la importancia de la capacitación como parte de la orientación empresarial.

La participación privada en la educación permite al Estado disminuir su gasto en este rubro, respondiendo con ésta medida a la disciplina fiscal, pero afectado a todos los jóvenes que no tiene capacidad de pagar su educación y no pueden acceder al sistema de educación pública. Los empresarios se ven beneficiados con un nuevo mercado, que había sido controlado por el Estado. Un gran mercado que crece rápidamente en la década de los noventa. A partir de la revalorización de la educación superior, producto de las expectativas de crecimiento generadas con el “nuevo modelo económico”. Y con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Política de educación superior

Como ya señalamos, a pesar de la importancia que asume la educación superior desde la segunda mitad del siglo XX, y en especial en las dos últimas décadas del mismo siglo. Las transformaciones de la participación estatal en México a partir de la década de los ochenta, con la adopción de políticas

neoliberales, han limitado la actuación del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología. No obstante las importantes transformaciones en el proceso de reproducción del capital, con el advenimiento de la sociedad del conocimiento, que pone en el centro del crecimiento económico la aplicación del conocimiento en los procesos de reproducción capitalista.

Para analizar la política de educación superior, ciencia y tecnología, llevada a cabo durante nuestro período de estudio, es necesario tomar en cuenta las características específicas de nuestro país, -no consideradas por las instituciones de crédito internacional al hacer sus recomendaciones de política educativa-, entre las que desatacan:

- a) Los cambios demográficos
- b) El proceso de urbanización
- c) El avance de los indicadores del sistema educativo
- d) Los cambios en la política económica del país

a) Cambios demográficos

Uno de los elementos que explican la creciente demanda de educación superior es el cambio en la estructura demográfica nacional.

Desde la década de los ochenta México registra una disminución en sus tasas de natalidad, la cual pasó de 34.5% en 1980 a 21.1% en 2005.

El grupo quinquenal que presenta un crecimiento porcentual mayor es el de 20 a 24 años, que pasó de 9.2% de la población total en 1980 (6 154 527 habitantes) a 9.3% de la población total en el año 2000 (9 071 134 habitantes) y a 9.4% de la población total en el año 2003 (9 723 600 habitantes).

El mayor crecimiento de este segmento poblacional incrementó la presión en la demanda escolar de educación superior. Sin embargo, el gobierno, en nuestros años de estudio, destina más recursos a educación básica que a educación superior. La disminución de recursos para educación superior ha limitado las posibilidades de acceso a este nivel a 80% de los jóvenes en edad de cursar estudios superiores. La siguiente nota da cuenta de esta problemática, que se agudiza año con año.

De los 167 mil 668 aspirantes que realizaron examen para ingresar en una de las carreras de la UNAM en el ciclo escolar 2008-2009, 152 mil 991 (91.2%) no tendrán un lugar, mientras que sólo 14 mil 890 aspirantes (8.7%) lograron acceder a la máxima institución educativa del país. En tanto, 48 mil 890 aspirantes a la educación superior en el IPN tampoco obtendrán un espacio. En suma, serán casi 200 mil jóvenes, entre los solicitantes de la UNAM y el Poli, los que quedarán fuera del sistema educativo si no tiene otra opción (*La Jornada*, 5-VIII-08).

Ahora bien, si consideramos las doce principales instituciones públicas de educación superior, el total de rechazados fue de 363 mil jóvenes en el mismo período.

En el lapso analizado se ha duplicado el número de jóvenes que no tienen acceso a la educación media y superior, en 1982 había 8 millones de jóvenes entre 16 y 24 años excluidos de la educación, en 2008 ya había 16 millones en esta situación.

De acuerdo a un Informe de la UNESCO en México, en el 2003, sólo 225 estudiantes por cada 10 000 habitantes estaban inscritos en educación superior, por debajo de países como Argentina con 531 estudiantes, Panamá con 424, o Costa Rica 403 estudiantes por cada 10 000 habitantes, por citar sólo a los que encabezan la lista (IESALC-UNESCO, 2006, 244).

b) El proceso de urbanización

En México existe una alta concentración poblacional, en 1980 las zonas urbanas representaban 66%, para el año 2000 llegaron a 74.6% y para 2005 la población que vivía en zonas urbanas llegó a 76.4 por ciento.

En 1990, 51.5% de la población urbana total se concentraba en 6 entidades federativas de la república mexicana (Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Puebla) y 59.6% de la matrícula total de educación superior se ubicaba en estos mismos estados (Didriksson, 2006, p. 8).

En 2005, las 6 entidades más pobladas concentraban 45.53% de la población y eran: Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato. En 2006 estos estados tenían 47% de la matrícula de educación superior.

El proceso de urbanización va acompañado de la concentración del ingreso, lo cual permite que las instituciones privadas de educación se instalen en las ciudades. La concentración del ingreso en las entidades federativas puede medirse de acuerdo al monto de su producción, *i.e.* por medio de su PIB.

En el período 1993-2006 la concentración del ingreso –medida como la participación que tiene una entidad en el total nacional– tenía a cinco entidades como aquellas que juntas concentraban cerca de la mitad de la producción nacional. Durante 2006 éstas entidades en conjunto produjeron 50% de la producción del país: Distrito Federal (20.32), Estado de México (10.64), Nuevo León (7.45), Jalisco (6.26) y Chihuahua (4.61).

A pesar de lo cual en “2002 únicamente 45% del grupo de edad entre 19 y 23 años, que vive en zonas urbanas con ingresos medios o altos recibe educación superior, y solamente 11% de quienes habitan en zonas urbanas

pobres, y nada más 3% de los que viven en sectores rurales cursan este tipo de estudios” (Didriksson, 2006,7).

La concentración del ingreso en las ciudades posibilita, la instalación de servicios educativos privados de nivel superior. Especialmente cuando la inversión pública además de ser limitada no responde a las necesidades regionales y el gobierno federal fomenta deliberadamente la participación privada.

c) Avance de los indicadores del sistema educativo

Otra de las razones fundamentales para entender el crecimiento de la demanda de educación superior en México, es el avance en los niveles educativos previos al nivel superior, entre los que se incluyen: las tasas de absorción, las tasas de deserción y la eficiencia terminal. La mayor demanda de servicios de educación superior, aunada a la disminución del gasto público en este nivel educativo propició un mayor crecimiento de la educación privada.

En 1980 la educación privada representaba sólo 7% del gasto nacional en educación. Diez años después era de 12.37%, en el año 2000 era de 21.7% y en 2007 representaba 22.7 por ciento.¹

Esta situación se ha agudizado aún más en educación superior, de acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), para el ciclo escolar 2004-2005, 32.8% de la educación en licenciatura universitaria y tecnológica era particular; y en el posgrado, la educación privada era 42.6 por ciento.

Este crecimiento de la educación privada está asociado a la disminución del gasto público en educación superior, y como consecuencia de esto, al aumento del gasto de las familias en educación, el cual se incrementó fuertemente a partir de 1989. Las familias que más gastan en educación son las de mayores ingresos, x decil, y su gasto va en orden descendente hasta llegar al primer decil.²

d) Cambios en la política económica del país

El monto y orientación del financiamiento para la educación superior depende básicamente de los criterios establecidos en la política económica, de ahí la importancia del análisis de las transformaciones de dicha política que comenzó desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), con la aceptación de préstamos que México recibió del Banco Mundial y del FMI, instituciones que operan la política económica que Estados Unidos y el capital financiero transnacional aplican a otros países.

1 Cálculos hechos con base en el Gasto Nacional de Educación en México, 1980-2007, de los Informes de Gobierno de 1989, 1994 y 2007.

2 INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares 1984-2006.

Desde inicios de la década de los ochenta se iniciaron las *reformas estructurales* que se profundizaron en la década de los noventa. A partir de entonces, la política económica nacional ha estado caracterizada por el fortalecimiento de México en el comercio internacional, la disminución de la participación del Estado en el mercado, la aplicación de una política fiscal restrictiva, el estricto control de los indicadores macroeconómicos, la protección del capital financiero, la transformación de la deuda privada de los bancos y empresas en deuda pública, así como el fomento de la participación del sector privado en actividades que antes eran exclusivas del gobierno como la educación o la salud.

Con el crecimiento del mercado, se revaloró la demanda de estudios de educación superior, como una necesidad para insertarse en la competencia internacional, así como el manejo de nuevas tecnologías de la información y la preparación de recursos humanos altamente especializados en nuevos campos del conocimiento.

Sin embargo, la disminución de la participación del Estado en la economía afectó el financiamiento público. De 1990 a 2006 se registran los mayores incrementos de la matrícula de educación superior privada a pesar de que el gobierno destina importantes, aunque insuficientes, recursos a educación. En éste período podemos ver que ha disminuido el porcentaje del gasto federal que se destina a educación superior, y ha aumentado el que se destina a educación básica.

En 1990, el gasto en educación superior representaba 40.1% del gasto orientado a educación básica, para el 2002, el gasto federal en educación superior representó solamente 30.1% del gasto federal en educación básica” (Diriksson, 2006, p. 19). En 2006 el gasto federal en educación superior disminuyó a sólo 28% del gasto federal en educación básica.³

Estos datos son congruentes con las políticas que ha seguido el Estado mexicano de apoyar fundamentalmente a la educación básica. El argumento del gobierno es que los alumnos que llegan a educación superior provienen de las clases medias y por tanto, es más equitativo apoyar la educación básica. Sin duda en un argumento poco original ampliamente fomentado por instituciones como el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el no invertir en educación superior, ciencia y tecnología, nos ubica como país maquilador, exportador de petróleo, productos agropecuarios y mano de obra barata. La educación superior, entonces, no es prioridad para los gobiernos neoliberales, que hablan de la necesidad de incrementar la competitividad para participar en el proceso de globalización, pero no apoyan la educación superior ni destinan recursos suficientes a ciencia y tecnología.

³ Cálculo realizado con base en el Anexo Estadístico del Informe de Gobierno de 2007.

Transformaciones en las políticas de financiamiento público

Con la reorientación del gasto público programable total, que se dio en nuestro período de análisis, se registra una mayor participación porcentual de las funciones sociales (salud, educación, seguridad social, etcétera) en detrimento de las funciones productivas (desarrollo agropecuario, energía, pesca, comunicaciones y transportes, actividades comerciales y otros servicios).

Esta estructura del gasto responde al planteamiento ortodoxo de disminuir la participación del Estado en la economía. En 1990, el gasto del Estado en la producción era de 52.3% del total y para 2002 este porcentaje disminuyó a 29.4%. En 2008 representó 31.9%.⁴ Dentro del gasto programable total, los recursos destinados a desarrollo social crecieron de 1990 a 1993, en éste año el gasto de desarrollo social llegó a 51.5% del gasto público programable y el destinado a funciones productivas bajó a 38 por ciento.

En contraste la crisis de 1994 afectó al gasto público, "... en educación pasó de 15 195.0 millones de dólares en 1993 a 9 080.6 en 1995, lo que representa una caída de 40.2%" (Didrickson, 2006, 18). El deterioro de los servicios públicos educativos favorecieron la inversión privada.

A partir de 1995 el gasto público en educación ha sido el gasto social que más ha crecido, aunque, como ya señalamos, el gasto en educación superior ha disminuido su participación con respecto al de educación básica, a pesar del cambio en la estructura demográfica. Desde la perspectiva del conjunto del gasto público, el cambio en la política económica, también propició que el gasto en educación pasara a ser el mayor de los gastos programables. Sin embargo, del gasto no programable, el costo financiero de la deuda (intereses, comisiones y gasto de la deuda pública) compite con el gasto en educación. Los programas de apoyo financiero se iniciaron a partir de 1995, con el rescate bancario. La deuda privada de los bancos se transformó en deuda pública, para proteger a las instituciones financieras y algunos industriales que se habían declarado en banca rota. "En 1995, el costo financiero de los programas de apoyo financiero representó 17.9% del costo financiero total del sector público federal. Para el año 2002, dicho costo representó 24.7% del costo total" (Didrickson, 2006, 22). Desde entonces el gasto en educación tiene que competir con el pago del costo financiero de la deuda.

El gasto público en educación esta compuesto por:

- Gasto federal
- Gasto estatal
- Gasto municipal

⁴ Datos tomados de: "Clasificación funcional del gasto público programable", en Anexos Estadísticos de los Informes de Gobierno de 2002 y 2008.

El primero representa aproximadamente 80% del gasto público total en educación y tiene como prioridad el apoyo a la educación básica. La educación superior no es prioridad del gobierno federal, en este nivel a partir de 1995 se ha ampliado la participación del capital privado sin regulación por parte del Estado.

Durante la década de los ochenta se dio un estancamiento de crecimiento de la matrícula de educación y una fuerte disminución del gasto público en educación. En educación superior en esta década destacan:

- 1) La disminución de la tasa media anual de crecimiento de la matrícula, la cual fue de 3.5% en el período 1982-1988, frente a 6.7% en el período 1976-1982 y a 15.7% de 1970 a 1976. Situándose por debajo del crecimiento poblacional del grupo de 20 a 24 años, el cual creció a un ritmo de 3.9% anual de 1982 a 1988 (Fuentes, 1989, 7).
- 2) La caída del gasto real destinado a educación superior en 1988 representaba apenas 64% del gasto real de 1982.
- 3) A pesar de esta situación, el diagnóstico que hizo el gobierno con respecto a la educación superior fue, en ese entonces, que era excesivo el número de egresados de este nivel educativo.

Éste último señalamiento es coherente con el proyecto de país maquilador impulsado desde el gobierno de Miguel de la Madrid, de ahí la importancia que se le dio a la educación media terminal.

En los noventa, vuelve a crecer la demanda de educación superior, la matrícula total de educación superior pasó de 1 252 000 alumnos en el ciclo escolar 1990-1991 a 2 047 895 en el ciclo escolar 2000-2001, una década después, lo que representó un incremento de 63.5%. En estos años las instituciones que más crecieron fueron las particulares*. Para el ciclo escolar 2006-2007 la matrícula de educación superior fue de 2 528 664 estudiantes.

El mayor crecimiento de la educación particular responde a la falta de opciones públicas, que han limitado su crecimiento por problemas financieros, la oferta pública no ha podido responder a la demanda.

Sin embargo, instituciones como ANUIES, consideraban en 2004, que: "Dadas las actuales condiciones económicas de los aspirantes a cursar estudios superiores, no se ve la posibilidad de continuar con la misma tendencia de

* De los datos de crecimiento de la matrícula de instituciones de educación superior particular, llama la atención que los años que más crecieron, fueron en los ciclos escolares 1998-1999 (14.4%) y 1999-2000 (14.1%), los cuales coincidieron con el conflicto estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que duró del 20 de abril de 1999 al 6 de febrero de 2000.

crecimiento de la educación superior particular, a una tasa promedio anual de 11% frente a la de 4% de la educación pública” (ANUIES, 2004, 10).

El deterioro de las condiciones de vida de buena parte de la población limita el acceso a opciones privadas de educación, motivo por el cual la educación pública superior adquiere especial relevancia.

Limitaciones financieras de la educación superior

Los problemas financieros de la educación pública superior en México no son nuevos, pero se agudizaron a partir de 1983. Los recurrentes problemas de la economía mexicana; pero sobre todo el cambio en las políticas económicas; la creciente demanda de educación superior; así como la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura, son algunos de los problemas que presionan financieramente a las Instituciones de Educación Pública Superior (IEPS). Otro elemento que ha influido en la asignación de recursos a las IEPS ha sido la presión de los organismos financieros de crédito internacional, los cuales consideran que la educación superior debe ser pagada por los usuarios, de acuerdo a estas instituciones el Estado debe destinar sus recursos al apoyo de la educación básica y media.

El actual modelo económico exige al gobierno: disciplina fiscal, desregulación, privatización y aumento de la apertura económica al exterior. En este contexto la disminución del gasto en educación y, especialmente en educación superior, la privatización de la misma son parte del mismo proceso.

El indicador más utilizado para medir el esfuerzo que un país hace para desarrollar su educación es el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), que se canaliza a la educación. A partir de 1983 el gasto público destinado a la educación ha tenido altibajos, en 1982 fue de 5.3%, llegando a su nivel más bajo en 1988 con 3.5%, en el gobierno de Vicente Fox este gasto fluctuó entre 4.1 y 4.6%. Aunque en 2005 fue de 5.5 y en 2006 y 2007 de 5.4 por ciento.

En nuestro período de estudio, el indicador más comúnmente utilizado en la información educativa es el del gasto nacional en educación, en el cual se suma el gasto del gobierno más el privado. Con lo cual el gobierno mexicano traslada parte de sus antiguas responsabilidades en materia educativa a las familias.

Como ya señalamos, del presupuesto público la mayor parte del gasto recae en la federación aproximadamente 80%; los estados tienen una participación menor y en la última década la inversión que más ha crecido es la privada. En 1980 el sector privado invertía en educación 0.3% del gasto nacional, cifra que se mantuvo en 1990, en el año 2000 se incrementó hasta 1.4% y del 2005 al 2007 se mantuvo en 1.6% (Calderón, 2007, 16).

La disminución del gasto público en educación ha contribuido a profundizar las desigualdades y el atraso educativo abriendo un campo de inversión rentable al capital privado. Si el gobierno destinara sólo una parte de

los recursos del FOBAPROA y el IPAB a financiar la educación, millones de jóvenes, podrían incorporarse a la educación superior.

Desde inicios de los años ochenta, el gasto en educación superior ha sido insuficiente e irregular, en 1982 llegó a su máximo nivel representando 0.74% del PIB. A partir de ese año empezó a disminuir alcanzando su nivel más bajo en 1988, año en que fue de 0.51 por ciento.

A partir de 1990 se ha dado una tendencia creciente del gasto federal educativo, con excepción de los años 1995, 1996, 1997 y 2000. Sin embargo, el gasto en educación superior respecto al gasto total de la SEP, pasó de 16.8% en 1990 a 14.7% en 2003. En 2006 el gasto público destinado a educación superior fue de 15.4% del total del gasto (Fox, 2006, 35). Situación contraria a la necesidad de apoyar a los niveles superiores del sistema educativo nacional ante la transición demográfica y la creciente demanda de ingreso de los jóvenes egresados del bachillerato. Esta asignación de recursos contrasta con la que se tuvo en 1983, la más alta en las dos últimas décadas, año en el cual se destinó a educación superior 21% del presupuesto federal educativo. (ANUIES, 2004, pp. 26-27).

El incremento acumulado del Gasto Federal en Educación Superior (GFES) para el período 1990-2002 fue de 8.6%, lo que representa un crecimiento promedio anual de 0.67%, el cual contrasta con el crecimiento promedio del PIB en este período que fue de 2.97 por ciento.

Otro indicador importante para evaluar el financiamiento de la educación es el gasto por alumno. De acuerdo al *Tercer Informe de Gobierno* del presidente Vicente Fox, en el período 1990-2002 el gasto por alumno pasó de 4.6 a 40.3 miles de pesos. Sin embargo si se calcula a pesos constantes de 1993 se puede ver que el gasto por alumno en 2002 era de 6 300 pesos, menor que el que se ejerció en 1994, 7 100 pesos, y menor a su vez del que se ejercía en el año de 1980, de 6 500 pesos.

El rezago en el financiamiento de la educación superior también se puede apreciar si se compara su financiamiento con el de otros niveles educativos. En 1980 se destinada a educación básica 48.99% del gasto federal en educación y a la educación superior 23.41%; en 2006 educación básica recibía 63.68%, y superior sólo 18.43%, lo cual resulta contradictorio si recordamos que debido a la disminución de la tasa de natalidad la mayor demanda educativa se encuentra en la educación media superior y en educación superior. También podemos señalar que el costo por alumno de educación superior se ha acercando al de educación básica de 1990 a 1999; a partir del año 2000, el costo por alumno de educación superior no continúa cayendo.

El gasto en educación superior varía según el criterio que se tome en cuenta: el gasto federal en educación superior incluye: el gasto en educación superior, el de ciencia y tecnología y el ejercido por el Conacyt. Del total

del gasto sólo una parte ingresa directamente a las IES, lo que corresponde a ciencia y tecnología y lo del Conacyt va destinado a proyectos específicos.

En cuanto a la participación porcentual del gasto federal de la educación superior de 1980 a 2006 el porcentaje más alto se dio en 1980 con 23.43%, le siguió 1983 con 21.79%, y después de éste año no se ha vuelto a llegar a 20% del gasto federal de educación. Durante nuestro período de estudio, el financiamiento de la educación superior guarda una estrecha relación con la concepción dominante acerca del papel que debe jugar el Estado en materia educativa. De ahí que el gasto más alto en educación superior se dio en 1982, en el preámbulo de las de las políticas neoliberales, y fue de 0.74% del PIB.

Se puede apreciar que el financiamiento de la educación pública superior en México no guarda relaciones con las necesidades de desarrollo nacional en el contexto de la globalización. Pero está estrechamente vinculado al modelo económico dominante y a las restricciones financieras impuestas por éste.

Alternativas

Como se ha señalado, la política de educación superior, ciencia y tecnología desde 1983, no guarda relación con las necesidades de desarrollo nacional, ni con aquellas que plantea la incorporación “exitosa” al proceso de globalización.

Como ya mencionamos, estas políticas no toman en cuenta las características de nuestra población: estructura demográfica, concentración urbana, y demanda educativa. Además de que dado el creciente deterioro económico de la población, la educación privada no es una alternativa viable para la gran mayoría de los estudiantes.

Ante esta situación proponemos:

- Replantear la relación Estado-mercado de acuerdo a las necesidades de desarrollo nacional, recuperando una “visión crítica y de largo plazo”.
- Un Plan de Desarrollo Nacional, que articule políticas de corto, mediano y largo plazos. Dentro de éstas, la política de educación superior-ciencia y tecnología son fundamentales, pero se tiene que vincular con otras políticas públicas (industrial, agropecuaria, de salud). Para que los egresados de nuestras universidades, obtengan un empleo y sean socialmente útiles.
- Se requiere generar empleos para gente calificada, para evitar la fuga de cerebros.

Para incrementar la competitividad es necesario invertir en educación y vincular a los centros de investigación con el sector productivo.

Actualmente se considera que la inversión en capital humano es tan importante como la inversión en capital fijo.

Bibliografía

- ANUIES (2000), *La educación superior en el Siglo XXI: líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES*, México.
- (2004), *El Financiamiento de la educación superior. Propuestas para la Convención Nacional Hacendaria*, México.
- Banco Mundial (1996), *Prioridades y estrategias para la educación. Examen del Banco Mundial*, Washington D.C. 194 pp.
- Banco Mundial y UNESCO (2002), *Higher education in developing countries: peril and promise*, Washington D.C.
- Didrickson, Axel y otros (2006), *Proyecto: El financiamiento para las instituciones de educación superior en México 1990-2002*, CESU-UNAM, <http://www.iesalc.unesco.org>.
- INEGI, *Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares 1984, 1989, 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006*.
- IESALC-UNESCO (2006), *Informe sobre la educación superior en América Latina y el Caribe 2000-2005*, Editorial Metrópolis, Caracas Venezuela.
- Informes de Gobierno, Presidencia de la República, varios años.
- Sunkel, Osvaldo “En busca del desarrollo perdido”, en *Problemas del Desarrollo*, vol. 37, núm. 147, octubre-diciembre de 2006, IIEc-UNAM, México.